

ESTADO, NACIÓN, REFORMA. LAS PARADOJAS DEL NACIONALISMO BOLIVIANO EN LOS AÑOS TREINTA

Ferran Gallego
Universidad Autónoma de Barcelona

En julio de 1985 tuve la ocasión de asistir al desarrollo de las elecciones presidenciales y legislativas bolivianas. Dos aspectos bastante interdependientes llamaron mi atención. Por un lado, la inquietante dificultad para la renovación de los más altos cuadros políticos del país: Paz Estensoro, a sus 78 años, iba a sustituir a un Siles Zuazo de 71, y ambos disponían de una dilatada experiencia en la vida pública, iniciada al acabarse el primer tercio del siglo. Por otra parte, casi el 90 por ciento de los sufragios favoreció a aquellas fuerzas cuya denominación enarbolaba el término *nacionalista*¹. Una expresión de los criterios de legitimación y exclusión políticas nada accidental, que iba más allá de la elección caprichosa de siglas. De hecho, señalaba la persistencia de una opción alimentada en la posguerra del Chaco y consolidada en 1952, cuyas líneas de continuidad se hacían más vigorosas al plasmarse en la reiteración de las personalidades.

Ello no implica, desde luego, que el nacionalismo sea una referencia ideológica extraña en la arena latinoamericana. Ni siquiera es excepcional que supere el rango de identificación partidista para otorgar el derecho mismo, por implícito que éste sea, al ejercicio de la actividad política. Por el contrario, Bolivia comparte con otros países del área la coexistencia del nacionalismo hegemónico con la fragilidad de las estructuras nacionales. Pero tal vez sea Bolivia un punto privilegiado para examinar ese encaje, bastante habitual, de carencias materiales y sublimación

1. Las formaciones políticas que obtuvieron mayor número de votos fueron el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Paz Estensoro, la Acción Democrática Nacionalista de Hugo Bánzer y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria de Jaime Paz Zamora. Fuerzas nacionalistas menos importantes, pero que lograron representación parlamentaria, eran el M.N.R. de Izquierdas y M.N.R. Vanguardia.

ideológica. En la trayectoria formativa de las repúblicas americanas, no sería fácil hallar un ejemplo tan claro de pluralidad étnico-cultural mal asimilada, crecimiento sin integración económica, escasa definición física inicial, alto volumen de amputaciones territoriales en guerras de frontera, ineficacia de las instituciones estatales como mecanismos de representación, vigor de las tendencias centrifugas, etc., acompañados de un discurso nacionalista cuyo énfasis brota de esa misma enumeración de obstáculos ².

Este artículo pretende esbozar los orígenes del nacionalismo como eje del proyecto político hegemónico en la sociedad boliviana durante los últimos cincuenta años. A mi entender, tales orígenes deben buscarse en la *generación del Chaco* y, sobre todo, en la gestión del reformismo militar que siguió a la derrota frente a Paraguay ³. Dicho episodio mostró las contradicciones del nacionalismo en un Estado no nacional; y, al subrayar los riesgos políticos de la experiencia reformista, obligó a un cambio de estrategia que culminaría en la revolución de 1952.

Al principio señalaba la continuidad física existente entre el nacionalismo de 1936, el de 1952 y el de 1985. Sería ingenuo desdeñar algunas fracturas ocultas tras esta aparente inmovilidad del relieve político boliviano. Con todo, pienso que los cambios en las alianzas de clase, relación con las Fuerzas Armadas, formas de ocupación del poder y articulación de los mecanismos estatales por citar algunas variables, obedecen a un complejo sistema de adaptación del discurso nacionalista, incomprensible sin una referencia al proceso abierto en la posguerra del Chaco.

Ciertamente, las alusiones al planteamiento del *problema nacional* boliviano podrían hacernos retroceder hasta el comienzo mismo de la historia republicana, cuando ya se pulsaron los síntomas de una desconfianza por la viabilidad de su proyecto estatal-nacional: recordemos la oposición de algunos fundadores del nuevo estado a la destrucción de los vínculos con el Bajo Perú, reiterada implícitamente en los esfuerzos por edificar la efímera Confederación ⁴. Consideremos también la búsqueda de una denominación que legitimara la especificidad del territorio estatal, culminada con la elección del apellido del Libertador. En lo que afecta a la fase caudillista, la trayectoria boliviana siguió la regla general del

2. Véase el interesante planteamiento de Marie Danielle Démelas, en *Nationalisme sans nation? La Bolivie aux XIX-XX siècles*, Paris, 1980.

3. El estudio pionero sobre este tema corresponde a Herbert S. Klein, *Parties and Political Change in Bolivia, 1880-1952*. Cambridge, Ms., 1969. Los límites cronológicos del título pueden llamar a engaño: de hecho, el grueso del libro corresponde al período 1920-1940. Véase también mi tesis doctoral, *Bolivia: Génesis de una revolución. Las experiencias de reformismo militar tras la guerra del Chaco, 1936-1939*, leída en la Universidad Autónoma de Barcelona en junio de 1990.

4. En las sesiones inaugurales del Congreso de la República Bolívar, se plantearon tres posibilidades: la incorporación a Argentina, al Perú, o la opción independiente. Dos representantes paceños votaron a favor de la unión política con el antiguo Perú. Acerca de los primeros años de andadura republicana, véase la tesis doctoral de William Lofstrom, *The Promise and Problem of Reform. Attempted Social and Economic Change in the First Years of Bolivian Independence*. Cornell University, 1972. Sobre la Confederación, la tesis doctoral de Philip Parkeson, *Sub-regional Integration in 19th Century South America, Andres Santa Cruz and the Peru-Bolivia Confederation*, Universidad de Florida, 1979.

continente en sus dificultades para fijar instituciones estables⁵. Sin embargo, la instauración del régimen civilista conservador coincidió con el desastre de la guerra del Pacífico y la pérdida del Litoral, uno de los elementos centrales de la mitología nacionalista boliviana hasta nuestros días⁶. Como en otras amputaciones territoriales, sufridas siempre lejos del núcleo vital de la república, la catástrofe se achacó a la incompetencia de los grupos dirigentes para definir un proyecto de Estado Nacional. Pero, además, en contacto con ciertas corrientes sociológicas de fines del XIX, se asistió a una lectura pesimista del desarrollo nacional boliviano, basada en las desventajas de la pluralidad racial y el mestizaje: Nicomedes Antelo, Gabriel René Moreno, Alcides Arguedas o Bautista Saavedra, desde posiciones políticas distintas, fundamentaron el rechazo de la *bolivianidad* entendida como integración de una sociedad multiétnica⁷. Utilizadas como justificación *progresista* para arrebatar las tierras de comunidad a los indígenas, para marginarlos de sus derechos políticos o para atribuir a la persistencia de sus culturas los desequilibrios del crecimiento económico, las doctrinas liberal-positivistas obstruyeron la elaboración del discurso nacionalista hasta mediados de los años 20. Bajo el régimen de Hernando Siles Reyes, y en torno a la *generación del centenario*, el *problema boliviano* comenzó a pensarse en términos de reforma política. Fue entonces cuando la influencia del social-indigenismo peruano, las simpatías por la revolución mexicana, la movilización estudiantil por la reforma universitaria y la incipiente articulación del sindicalismo urbano fundamentaron una lectura de la trayectoria republicana que superaba la retórica contemplativa liberal para centrarse en la crítica a los mecanismos del atraso y en la búsqueda de alternativas políticas al orden tradicional. Por lastrados que estuvieran sus primeros pasos, el Partido Nacionalista del presidente Siles operaba ya con esa identificación entre nacionalismo y reformismo que habrá de desarrollarse en la década siguiente⁸.

5. La bibliografía boliviana sobre los aspectos políticos de la etapa caudillista es abundante, pero de escasa consistencia interpretativa. Citemos sólo las obras clásicas de Alcides Arguedas, *Los caudillos letrados*, Barcelona 1923; *La plebe en acción*, Barcelona, 1924; *La dictadura y la anarquía*, Barcelona, 1926; *Los caudillos bárbaros*, Barcelona, 1929. Resulta mucho más satisfactorio el análisis de James Dunkerley, «Reevaluación del caudillismo boliviano», publicado en *Historia Boliviana* (Cochabamba), 1981/1, pp. 59-77.

6. Sobre la guerra del Pacífico, véase: R. Querejazu, *Guano, salitre, sangre. Historia de la Guerra del Pacífico*. Cochabamba, 1979; H. Bonilla, *Un siglo a la deriva. Ensayos sobre el Perú, Bolivia y la guerra*, Lima, 1980; también, la tesis doctoral de R.S. Phillips, *Bolivia in the War of the Pacific, 1879-1880*. Universidad de Virginia, 1973. No disponemos de estudios de conjunto sobre la consolidación institucional que siguió a la guerra, pero puede consultarse con provecho la primera parte del libro de Klein citado más arriba. Si tenemos, en cambio, una excelente monografía sobre aspectos económicos del período, escrita por Antonio Mitre: *Los patriarcas de la plata. Estructura socioeconómica de la minería boliviana en el siglo XIX*, Lima, 1981.

7. Indispensable, a este respecto, la lectura de los artículos de M.D. Démelas: «Darwinismo a la criolla: el darwinismo social en Bolivia, 1880-1910».. *Historia Boliviana*, 1/2 (1984), pp. 55-82; «El sentido de la historia a contrapelo. El darwinismo de G.R. Moreno (1836-1908)». *Historia Boliviana*, 1V/1 (1984), pp. 65-80.

8. Acerca del Partido Nacionalista y, en general, de las influencias culturales que percibía la juventud del centenario, Augusto Céspedes, *El dictador suicida, 40 años de historia de Bolivia*, Santiago de Chile, 1956. La evolución política de los años 20 puede seguirse en un Klein, *Op. cit.*, y en la *Historia de Bolivia* de Porfirio Díaz Machicao, volúmenes correspondientes a Saavedra, 1920-1925 La Paz, 1954, y a Guzmán, Siles, Blanco Galindo, 1925-1931, La Paz, 1954. También resultan útiles las biografías de los tres presidentes fundamentales antes de la guerra del Chaco: D. Alvéstegui, *Salamanca, su gravitación sobre el destino de Bolivia*, 4 vols., La Paz, 1957-1970; E. Gómez, *Bautista Saavedra*, La Paz, 1975; A. Crespo, *Hernando Siles. El poder y la angustia*, La Paz, 1985.

La guerra del Chaco no fue la causa última de la crisis de las instituciones liberales bolivianas, pero aceleró su descomposición, imponiendo ritmo y carácter específicos al proceso político de la segunda mitad de los años 30⁹. El esfuerzo militar ahondó las penalidades de una economía muy sensible a las características de la Gran Depresión —en especial el descenso de precios de las materias primas. El Estado, que había suspendido el pago de la deuda exterior antes del estallido de la guerra, hubo de asumir una espiral inflacionaria para financiar los costos del conflicto, y su desesperada búsqueda de recursos acabó enfrentándolo con su propia base social, reacia a aceptar el endurecimiento del régimen tributario. La evidencia de los costos económicos de la guerra no deben ocultar, sin embargo, su impacto político y social: un ingrediente menos cuantificable, pero del que derivan los rasgos precisos de la crisis de posguerra. De hecho, el conflicto contra el Paraguay continuaba la serie de guerras de frontera que Bolivia había venido sosteniendo con sus vecinos más poderosos, tratando de definir sus límites territoriales¹⁰. Pero la envergadura del esfuerzo bélico superó a los del Pacífico y el Acre, hasta convertirse en el episodio militar de mayores dimensiones que se ha producido en suelo americano durante el siglo XX. Las necesidades de movilización de tropa llevaron al alistamiento forzoso de indígenas, cuidadosamente salvado en 1879 y 1903. El ensayo de la *generación del Chaco* ha remarcado la importancia de esa incorporación masiva del indígena como mecanismo elemental de *nacionalización* de la guerra y de los combatientes. Por otra parte, las expectativas de un éxito fácil sobre un enemigo menos numeroso y peor armado se concretaron en un desastre militar sin precedentes por el volumen de pérdidas humanas y territoriales. Ello alimentó una frustración proporcional a las previsiones triunfalistas difundidas en los primeros compases del conflicto, rápidamente volcada a buscar responsabilidades en la élite gobernante y en el Comando Militar.

El desastre bélico podía confirmar el permanente fracaso histórico de Bolivia, pero resultaba imposible operar con un discurso semejante al que esgrimieron el positivismo o el darwinismo republicanos. Por el contrario, fue el mismo régimen construido al calor de estas doctrinas el que pudo presentarse como responsable de la derrota frente al Paraguay. El fin del conflicto asistió a la pérdida de la hegemonía de la cultura política del antiguo régimen, cuya manifestación más palpable fue la incapacidad de los partidos oligárquicos para controlar los mecanismos de movilización y representación social. Expresión visible de una falla más profunda, la pérdida de legitimidad de liberales y republicanos erosionaba una línea de resistencia indispensable del orden de preguerra. No sólo mostraba la incapacidad de las instituciones tradicionales para integrar a los sectores que habían comen-

9. La bibliografía sobre la guerra del Chaco es ingente y muy desigual. Sobre los aspectos meramente militares, cabe destacar: D. Zook, *La conducción de la guerra del Chaco*, Buenos Aires, 1962; R. Querejazu, *Masamaclay. Historia política, diplomática y militar de la guerra del Chaco*, La Paz, 1965, así como el capítulo correspondiente al conflicto en el libro de J. Dunkerley, *El poder militar en Bolivia. Historia del ejército*. La Paz, 1987.

10. Acerca de la definición territorial boliviana, véase el libro de V. Fifer, *Bolivia. Territorio, situación y política desde 1825*. Buenos Aires, 1976.

zado a intervenir en la política en la década anterior y que se había reforzado durante la crisis económica y el conflicto armado. Indicaba también las dificultades del aparato estatal para sostener su relación orgánica con los grupos dirigentes del antiguo régimen, ya fuera porque recelaban del poder real de los viejos partidos para mantener el orden, ya fuera porque, en sus estratos más bajos, la clientela de éstos se iba desplazando hacia posiciones reformistas¹¹.

Así, bajo los efectos combinados de la crisis económica, la derrota militar y la pérdida de hegemonía de los grupos tradicionales, las posiciones ideológicas esbozadas poco antes de la Gran Depresión hallaron un cuerpo social activado por la guerra, que buscaba ahora la justificación de su esfuerzo en el frente mediante la abolición del régimen liberal-republicano. Sería imposible recoger aquí la multitud de testimonios de contemporáneos que subrayan el valor referencial del episodio bélico para marcar el punto de quiebra del orden tradicional. Augusto Céspedes, Carlos Montenegro, José Cuadros, Porfirio Díaz Machicao, Miguel Bonifaz, entre otros muchos, han señalado tanto el vigor de la ruptura como la inmadurez de las alternativas políticas que se sugerían¹².

La misma definición generacional que acostumbraban a utilizar los protagonistas de la crisis de posguerra servía para encubrir la falta de objetivos políticos claros y homogéneos¹³. De este modo, mientras la historiografía y la ciencia política han asumido el papel de la guerra en la formación y reforzamiento de una conciencia nacional, han debido reconocer también la vaguedad del discurso político nacionalista¹⁴. Una carencia que, tengámoslo en cuenta, dotaría al nacionalismo de una capacidad de adaptación de la que no dispondrían opciones con mayor tendencia a la minuciosidad programática y a la ortodoxia principista, y que es responsable de buena parte de su supervivencia como doctrina movilizadora desde los años 30. Sin embargo, esa formación progresiva, cambiante del discurso nacionalista a largo plazo no nos impide hallar algunas referencias básicas cuando hacemos el análisis

11. De los tres partidos identificados con el orden tradicional, sólo el republicano-socialista de Saavedra mantuvo sus expectativas políticas, a costa de una ruptura formal con liberales y republicano-genuinos. Sobre el cambio de posición del P.R.S. puede leerse el manifiesto firmado por B. Saavedra y E. Vásquez, *Dónde estamos. A dónde queremos ir*. La Paz, 1935.

12. Céspedes definió perfectamente esta inmadurez en su intervención del 27 de mayo de 1938 ante la Convención Nacional, localizable en el *Redactor* de la misma, vol. I pp. 58-70. Otras obras de referencia: C. Montenegro, *Nacionalismo y coloniaje*. La Paz, 1979 (5ª ed.), p. 221; J. Cuadros, *Movimiento Nacionalista Revolucionario. Sus bases y principios de acción inmediata*. La Paz, 1942, p. 3. P. Díaz Machicao, *Historia de Bolivia, Toro, Busch, Quintanilla, 1936-1940*. La Paz, 1957, pp. 20 y ss; M. Bonifaz, *Bolivia, frustración y destino*. Sucre, 1965, pp. 126-127.

13. Así, el grupo Beta Gama, fundado antes del fin de la guerra, se enorgullecía de la debilidad de su discurso teórico, compensada mediante el énfasis puesto en la acción como programa (*El Diario*, La Paz, 11 de agosto de 1935). Puede seguirse también la reflexión de José Aguirre Gainsborg, intelectual trotsista fundador del Partido Obrero Revolucionario, que desde las páginas de este mismo periódico denunció las carencias doctrinales y el discurso meramente generacional de los grupos «socialistas» de posguerra «socialistas» de posguerra (*El Diario*, 17 de octubre de 1935).

14. Dunkerley, *Rebellion in the Veins*, Londres, 1984, p. 28; Klein, «David Toro and the Establishment of 'Military Socialism' in Bolivia», *Hispanic American Historical Review*, (Durham), vol. 44/1 (feb. 1965), p. 25; R. Zavaleta, *Bolivia. El desarrollo de la conciencia nacional*. Montevideo, 1967, pp. 43-44. Véase también mi opúsculo *Bolivia, La Generación del Chaco: una reflexión política*. Barcelona, 1986.

en un periodo más breve. En sus orígenes y en su primera aproximación a una gestión gubernamental, el nacionalismo político realizó análisis de la realidad boliviana y estrategias concretas de reforma que podemos sintetizar de manera muy esquemática, para discutir más tarde aquellos aspectos que en su formulación o en su puesta en práctica resultaban más contradictorios con un discurso nacionalista consecuente.

Los nacionalistas de los años 30 se presentaron usualmente como partidarios de un *socialismo de Estado*. En efecto, ese «socialismo», que recorrió las posiciones políticas con una frecuencia que acabó restándole significado concreto, aparecía como denominación legitimadora al identificarse con el nacionalismo de posguerra. La referencia social trataba de distinguir el nacionalismo reformista de las veleidades patrióticas que pudieran ostentar los grupos liberal-republicanos, y la ecuación socialismo-nacionalismo permitía colocar, de forma primaria pero con eficacia comunicativa, la oposición a la izquierda radical en la referencia geográfica-popular y no en la voluntad transformadora. La alusión al Estado tampoco era accidental. El nacionalismo se levantaba sobre la conciencia de la falta de realización nacional: tal tarea, postergada desde la constitución formal de la república, se atribuía ahora a un Estado fuerte, con estructura y funciones distintas a las de los regímenes previos a la guerra del Chaco. El orden tradicional se había basado en la falta de correspondencia entre Nación y Estado, lo cual restaba legitimidad a las instituciones liberales, meros instrumentos destinados a politizar los intereses de la oligarquía. De ahí que fuera habitual la referencia al *superestado minero*, para señalar la sumisión de los poderes públicos a la intervención de la *rosca*. Tal denuncia, elemental e impresionista, de la manipulación política por sectores sociales no derivaba en una concepción obligadamente clasista de las instituciones. Por el contrario, las referencias a la identidad posible y deseable entre Nación y Estado, hacían de éste el ámbito de la síntesis de los intereses sociales concretos, convirtiéndolo en manifestación política de la Nación. Es obvio que esta proyección no es del todo ajena a las concepciones liberales que hacen del Estado el punto de conciliación de los conflictos sociales y la expresión de la soberanía popular. Y los nacionalistas no renunciaron a señalar la contradicción entre la herencia de la revolución francesa que legitimaba el orden demoliberal y la concreción aberrante que había tenido en el país andino. Tal actitud no desembocó en propuestas de actualización de los principios de democracia parlamentaria pluripartista, sino en la fascinación por una versión orgánica de la relación entre Nación y Estado, reflejada en las propuestas de representación corporativa o, para utilizar la terminología del momento, *funcional*.

El Estado fuerte propugnado por los «socialistas» de posguerra no sólo habría de vigorizarse para eliminar la tutela de la oligarquía, sino para asumir las tareas de *nacionalización* que se le asignaban. Debería asegurar, por ejemplo, la integración de las capas sociales y raciales excluidas de la Nación por el antiguo régimen. Habría de romper el aislamiento geográfico de amplias zonas del país, ante los riesgos de desembramiento por agresión externa o por el surgimiento de tendencias autonomistas. Considerando las pérdidas territoriales padecidas por Bolivia desde su independencia, esta incapacidad para controlar físicamente el territorio se

convertía en la imagen concreta de la inexistencia del Estado Nacional. Tendría que aceptar sus responsabilidad social, entendida como integración de los conflictos considerando ámbito propio de su actuación el control de las relaciones laborales, los límites a los derechos de la propiedad, la actividad sindical, etc. Además, la obra de nacionalización habría de atender su fundamento material: la articulación del mercado interior, sustituyendo las importaciones y diversificando la producción, obra de la que se esperaba la ruptura de la dependencia exterior y la incorporación de la república al conjunto de los países desarrollados. Tales tareas solamente podrían realizarse desde la solvencia; por ello, el reforzamiento del Estado no se planteaba sólo en términos políticos, sino en la captación de recursos. La obsesión nacionalista por el Estado rico era una respuesta a la habitual indigencia de la administración boliviana, responsable de la sumisión de las instituciones a los designios de la oligarquía.

El proyecto reformista justificaba la acción del Estado por la ausencia de una verdadera burguesía nacional y por la necesidad de que, a corto plazo, algunas de sus funciones fueran asumidas por los poderes públicos. A la ausencia de esta clase, responsable del desarrollo económico de los países avanzados, se achacaba el atraso económico boliviano. En su lugar, se disponía de una oligarquía antinacional, cuyo enriquecimiento se había basado en la exportación de metales preciosos y materias primas generadas por el subsuelo. La articulación económica del país, incluyendo su diseño viario, se había reducido a las necesidades de exportación de estos productos desde el altiplano y a la entrada de manufacturas y alimentos foráneos. Por consiguiente, la inexistencia de un Estado Nacional era también, en este sentido, el resultado de una opción concreta de la oligarquía, la elección de un camino de crecimiento que convertía a Bolivia en un país semicolonial. Esta descripción, por simplificada que fuera, conectaba con la cultura política popular, y permitía plantear una estrategia de modernización desarrollista que sus teóricos denominaron Revolución Nacional. La propuesta implicaba el control por el Estado de la actividad minera, mediante una legislación que permitiera la captación de la totalidad de las divisas y su reinversión productiva en el interior. Se aseguraba el respeto a la propiedad de las grandes empresas mineras, reconociendo el papel dirigente que podían jugar en el desarrollo de la república, pero se les exigía la orientación de sus beneficios al fomento de la industria boliviana. De igual forma, se planteaba la necesidad del autoabastecimiento alimentario del país, estimulando la producción agropecuaria a través de la colonización oriental, inversiones en tecnología, mejora de comunicaciones y sanciones a los latifundios improductivos. No sólo se rehuía una definición anticapitalista, sino que se planteaba abiertamente que el objetivo central era la atracción del capital extranjero y el fomento del capitalismo nacional. En definitiva, un planteamiento reformista destinado a incorporar a Bolivia al grupo de países desarrollados y que excluía cualquier otro proyecto revolucionario.

Estas líneas generales del discurso nacionalista, tanto en su interpretación de la historia republicana y de la realidad contemporánea del país y sus relaciones exteriores, como en los objetivos finales a conseguir, se han mantenido inalterable en lo sustancial, e incluso fueron teorizándose con mayor precisión en la década

siguiente a la derrota del Chaco. Las transformaciones operadas más adelante obedecieron al cambio en las circunstancias políticas y a un lento aprendizaje táctico del grupo que mejor asimiló el proyecto reformista: el M.N.R.¹⁵. Creo que lo interesante es detectar ahora aquellos factores que, en la posguerra inmediata, frustraron la aplicación de la propuesta nacional-reformista justamente cuando parecía disponerse de las condiciones más propicias para llevarla adelante.

La descomposición del tejido institucional boliviano que siguió a la guerra del Chaco no se tradujo en la aparición automática de fuerzas políticas alternativas. En la medida en que no había habido una actividad política *nacional* antes del conflicto, resultaba difícil que el nacionalismo reformista construyera un instrumento adecuado a su proyecto político. La proliferación de partidos «socialistas» al final de la campaña no debe llamarnos a engaño: se trataba de organizaciones locales que apenas superaban el perímetro de las capitales de departamento o de provincia¹⁶. Tal situación, que podría entenderse como una hipoteca sobre el proyecto político, resultaba menos dramática para los cuadros del nacional-reformismo, que habían elaborado una estrategia adaptada a esa carencia y basada en el recurso a las Fuerzas Armadas. Decíamos antes que la guerra del Chaco dio ritmo y naturaleza precisos a una crisis de raíces más profundas. Sin duda, el papel jugado por el ejército fue uno de esos caracteres definitorios de la coyuntura. El golpe de mayo de 1936 superaba un largo período de vigilancia de las instituciones liberal-republicanas para entrar en una fase intervencionista radicalmente distinta a las participaciones previas del ejército en las luchas entre las facciones del antiguo régimen. Ahora, las Fuerzas Armadas se consideraban dotadas de un proyecto político autónomo, teniendo presente la posibilidad de una permanencia indefinida en el ejecutivo. Las causas que propiciaron tal intervención son complejas y sólo se comprenden en su mutua dependencia; consideremos el papel de un conflicto exterior prolongado, que elevó el protagonismo del ejército en las decisiones políticas y militares; el sentimiento de una guerra perdida por la incompetencia de los responsables civiles y la corrupción de los sectores dominantes en la economía; el ascenso a puestos de responsabilidad, por méritos de guerra, de oficiales jóvenes, poco implicados en la Bolivia tradicional, sensibles al discurso nacionalista exaltado por la empresa bélica y a las teorías de renovación fomentadas por la derrota¹⁷; el temor a un proceso de responsabilidades, que cimentó la alianza de todos los sectores de opinión en un esfuerzo por eludir las investigaciones de la campaña, buscando una víctima alternativa en las instituciones civiles de preguer-

15. La mejor formulación fue la realizada por W. Guevara en sus *Tesis de Ayopaya* de 1944, recogidas por A. Cornejo en sus *Programas políticos de Bolivia*, Cochabamba, 1949, pp. 151 y ss.

16. La más importante de estas organizaciones fue la Confederación Socialista Boliviana, formada a fines de 1935 como resultado de la fusión de pequeñas entidades locales: de ella surgiría el Partido Socialista que funcionó durante el mandato del coronel Toro.

17. El modelo de este tipo de oficial es Germán Busch, uno de los pocos héroes de guerra que pudo enarbolar la propaganda nacionalista boliviana. Busch alcanzó el grado de Teniente Coronel y llegó a ser Jefe del Estado Mayor en funciones a los 32 años.

ra¹⁸; el temor a una radicalización social que podía hallar eco en los miles de campesinos y trabajadores urbanos desmovilizados¹⁹; las llamadas a una intervención preventiva que emanaba de las propias bases del antiguo régimen²⁰.

Si estos factores explican la intervención en sí misma, no bastan para darnos cuenta de su *naturaleza*, es decir, de la asunción de un proyecto nacional-reformista y de la voluntad de convertirse en sujeto de proceso de modernización. Obviamente, las Fuerzas Armadas no eran un cuerpo homogéneo, y el tipo de intervención sólo podía obedecer a la hegemonía temporal del núcleo más avanzado de sus oficiales. Tal hegemonía respondía a la mayor dispersión y desconcierto en que se hallaban las facciones conservadoras, actitud que reflejaba la que padecían sus paralelos en la sociedad civil; a la imagen que proyectaban inicialmente los sectores nacional-reformistas, que no indicaba una voluntad de permanencia en el poder, lo cual neutralizó una oposición interna desde el principio; a la impresión de que los núcleos más partidarios de la intervención estaban en mejores condiciones para defender los intereses corporativos del conjunto de las Fuerzas Armadas; a la posición dominante en algunos puestos clave del Alto Mando; a la conexión con actitudes similares en la sociedad civil, que habían adquirido una fuerte expansión a costa de los partidos tradicionales.

La intervención militar, que asumía en su plataforma de gobierno los programas elaborados por los círculos nacionalistas, venía a resolver así la carencia de un partido político sólido²¹. El ejército, o por lo menos una facción del mismo, aparecía como la única institución organizada a escala nacional. Pero ello implicaba fijar una política de alianzas adaptada a ese protagonismo. Los sectores nacionalistas entendieron, a lo largo de las experiencias militares de la posguerra, que el «socialismo de Estado» habría de plasmarse mediante el co-gobierno de los oficiales reformistas y una pequeña facción de administradores civiles vinculados a los círculos nacionalistas. Se excluyó abiertamente una concepción del cambio político que implicara la convocatoria de masas. Para los reformistas, tal convocatoria habría obligado a ofrecer compensaciones que podrían rebasar los límites del programa de modernización, ya fuera la reforma agraria, la expropiación minera o la democratización del aparato del Estado. Las ventajas de la simbiosis entre los jefes militares y los intelectuales nacionalistas parecen obvias a corto plazo; sin embargo, bastaba con que el sector reformista del ejército perdiera su hegemonía

18. Muestra de la hostilidad popular, que podría haber solicitado la investigación parlamentaria de la conducta del alto mando, es un informe del embajador británico señalando que el general Peñaranda, comandante en jefe del ejército, hubo de ser escoltado en su visita al Palacio presidencial, en octubre de 1935, por temor a agresiones de la multitud (British Legation, La Paz, 10 de octubre de 1935. Public Record Office, F.O. 371/18.641).

19. Tras tomar el poder, el coronel David Toro aseguró el carácter preventivo del movimiento: ver su justificación del golpe en *El Diario*, 17 de mayo de 1936.

20. La prensa conservadora, ante la falta de unidad de criterios de los grupos tradicionales, consideró oportuna una salida militar transitoria. Véase el editorial de *El Diario* correspondiente al 3 de agosto de 1935.

21. El programa de la Junta Mixta de Gobierno formada el 17 de mayo de 1936 recogía fielmente las propuestas de la Confederación Socialista Boliviana. Los puntos de aquella plataforma pueden verse en *El Diario* del 26 de mayo de 1936.

en las Fuerzas Armadas —lo cual acabaría sucediendo— para que los núcleos civiles se encontraran sin un instrumento de intervención política compensatorio.

La aceptación de esta política de alianzas implicaba la realización de una revolución nacional como alternativa a la revolución democrática, opción que otros sectores de la *generación del Chaco* propugnaron infructuosamente²². Por un lado, la alianza con los militares permitía que el nacionalismo se planteara como un proyecto político que no implicaba a las mayorías nacionales. Un nacionalismo que, pretendiendo *realizar* la nación, prescindía abiertamente de sus integrantes. Además, el temor a ser superados por la izquierda sindical o el radicalismo socialista en caso de una democratización del Estado, llevó a los nacionalistas a aceptar el régimen autoritario impuesto por el ejército, sin plantear que la alternativa a las instituciones de preguerra debía ser arbitrar fórmulas que aseguraran la participación de quienes hasta entonces habían estado al margen de la vida política. Así, no sólo se evitó cuidadosamente el establecimiento del sufragio universal como primer y elemental derecho de participación política²³, sino que ni siquiera se concretó una alternativa a la democracia liberal sobre la base de mecanismos de representación corporativa²⁴: aun cuando una estrategia de este segundo estilo no asegurara la democratización real del aparato del Estado, y pudiera pensarse más como un mecanismo de control que como instrumento de participación, su abandono señaló que los dirigentes nacionalistas excluyeron sus propias propuestas iniciales de dar mayor autenticidad a los sistemas de representación política. Que la protección del proceso por las Fuerzas Armadas asegurara su cumplimiento no excluye, en modo alguno, que los mecanismos de dirección resultaran contradictorios con un planteamiento coherentemente nacional-democrático. Desde sus inicios y hasta la ruptura con las Fuerzas Armadas, el nacionalismo reformista hubo de presentar el semblante de una propuesta de cambio realizado desde el Estado y de espaldas a los mecanismos de movilización y representación popular. Ciertamente, ello respondía a las dificultades para construir su propia organización política de masas, pero también a la competencia con las organizaciones de la izquierda socialista,

22. La mayor parte de los grupos de izquierda se movía en el ámbito del reformismo, ya fuera en torno al Partido Republicano Socialista, ya fuera alrededor de la Confederación Socialista Boliviana liderada por Enrique Baldivieso y Carlos Montenegro. Los sectores más vinculados a la izquierda socialista quedaron marginados, agrupándose en torno al P.O.R. trotskista o al Partido Socialista Obrero de Marof. Hasta la fundación del Partido de la Izquierda Revolucionaria, en 1940, los núcleos de izquierda marxista estuvieron muy lejos de constituir una alternativa viable frente al empuje del nacional-reformismo, arropado por las fuerzas armadas.

23. La Convención de 1938 no llegó a plantear esta cuestión. Cuando algunos diputados socialistas y liberales propusieron el voto para las mujeres «letradas», Céspedes respondió indicando que el derecho al voto se obtenía mediante el trabajo, por lo que éste correspondía a las mujeres indígenas y no a las de clase alta. La única respuesta posible era que la Asamblea aprobara el sufragio universal, pero se prefirió rechazar la moción favorable al voto femenino restringido. El debate sobre el voto femenino, en *Redactor de la Convención Nacional*, vol. III, pp. 108 y ss. La intervención de Céspedes, dejando en evidencia a la Asamblea, en pp. 148-149.

24. En la primera fase del régimen militar se decretó la afiliación sindical obligatoria, presentándose un proyecto de Asamblea Sindical que habría de convertirse en vía de participación política. Tras la caída de Tor, tal propuesta quedó en el olvido. Véase mi artículo «Un caso de populismo militar latinoamericano: la gestión de David Toro en Bolivia, 1936-1937». *Ibero-Amerikanisches Archiv*, Berlín, XVI (1988), nº 4, pp. 473-503.

cuya marginación del proceso quedaba asegurada mediante la permanencia del ejército en el poder. A fin de cuentas, el cambio de estrategia que llevó a la construcción de un partido nacional de masas, con la consiguiente radicalización de las propuestas sociales, sólo se verificó al agotarse las posibilidades de mantener el cogobierno con las Fuerzas Armadas.

La pluralidad étnico-cultural boliviana era un reto para el proceso de nacionalización propuesto por el reformismo. Obviamente, entendamos que la integración implicaba siempre mecanismos de aculturación, muchas veces aceptados por los indígenas para poder captar instrumentos idóneos a fin de defenderse de los hacendados²⁵. El proceso de *nacionalización* iba indisolublemente vinculado a la obtención de derechos políticos y el acceso a la propiedad de la tierra por parte del campesinado quechua, aymara o de otras culturas indígenas. Los derechos políticos, como se ha visto quedaron aplazados, y la Convención de 1938 rechazó un proyecto de reforma agraria presentado por la izquierda socialista²⁶. Este era, sin duda, uno de los puntos más delicados para la gestión reformista, al despertar simultáneamente la resistencia de los hacendados y de buena parte de la clase media urbana, criada en la consideración de los indígenas como una franja subordinada de la sociedad a la que, en el mejor de los casos, debía educarse para que asumieran la cultura criolla. Y, de hecho, a pesar de las protestas puntuales de algunos órganos de prensa nacionalista, fue la vertiente educativa la única en la que se llevaron a cabo realizaciones, considerando tarea prioritaria la labor *civilizadora* del indígena, aspecto que no dejó de despertar hostilidad en amplios sectores de la opinión conservadora, para quienes las escuelas indígenas fueron siempre núcleos de agitación²⁷. Tal vez sea oportuno destacar que, incluso en la etapa en que el nacionalismo se decidió a optar por una movilización de masas, la reforma agraria resultó un proceso espontáneo que el régimen salido de la revolución de 1952 no hizo sino reconocer. El voto universal, una vez firmado el decreto de reforma, serviría para asegurar la mayoría electoral a los nacionalistas, una vez se hizo efectivo el *pacto de reciprocidad* entre el M.N.R. y el campesinado. En cualquier caso, la experiencia de la posguerra del Chaco frustró también este aspecto de realización de la bolivianidad, a pesar de que la *incorporación del indio* se hubiera considerado, en la misma propaganda reformista, uno de los puntos neurálgicos de la obra nacionalizadora²⁸.

25. S. Rivera, *Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y quechwa, 1900-1980*. La Paz, 1986, p. 58-59.

26. La discusión constitucional en *Redactor...*, vol. V. pp. 210 y ss. El proyecto de la izquierda rechazado por 49 votos contra 36, en W. Alvarez, *Memorias del primer ministro obrero*. La Paz, 1986, pp. 180-182.

27. Véanse, por ejemplo, los artículos contra las escuelas indígenas aparecidos en *La Razón* (La Paz), 25 de agosto y 3 de septiembre de 1938, y la respuesta del diario nacionalista *La Calle*, el 13 de septiembre siguiente.

28. Los medios nacionalistas alabaron las experiencias cooperativistas como las de Ucareña en su diario de mayor difusión, *La Calle*, llegando a enfrentarse al gobierno del coronel Toro por las trabas que hallaba la comunidad campesina para desarrollarse (*La Calle*, 6 de julio de 1937). Sin embargo, no hubo una propuesta de reparto general de los latifundios, y los convencionales vinculados al periódico votaron contra la propuesta de reforma agraria en octubre de 1938. Disponemos de un excelente estudio sobre las experiencias cooperativistas tras la guerra del Chaco, el de J. Dandler, *Sindicalismo campesino en Bolivia. Cambios estructurales en Ucareña, 1935-1952*. La Paz, 1983 (2^a).

Al analizar las realizaciones concretas del nacionalismo en los años 30, debemos distinguir aquellos obstáculos que se derivaban de la coyuntura y los que procedían del mismo contenido del proyecto. Hemos visto hasta qué punto factores específicos de la posguerra, como el intervencionismo de las Fuerzas Armadas, llegaban a condicionar el margen de maniobra de esta corriente. En lo que se refiere a su proyecto económico, no fue menor el peso de las circunstancias en que se desarrolló su primera experiencia de gestión política. Los nacionalistas afrontaban la herencia del endeudamiento liberal, la crisis de los años 20 y los efectos destructivos de la guerra. En la misma medida en que estas variables favorecieron la descomposición del orden tradicional, imposibilitaron llevar adelante un programa de corte necesariamente expansionista. El Estado no pudo disponer del protagonismo pensado en el desarrollo del país: sus tareas de potenciación productiva, realización de infraestructura e incluso redistribución fiscal quedaron colapsadas por la persistencia de la crisis inflacionaria, la especulación, las dificultades de importación y el estancamiento de la demanda de estaño, a lo que se añadía el peso de los gastos militares, la amortización de la deuda interna y los intereses de los empréstitos extranjeros. Los aumentos de la presión fiscal se evaporaron en la atención de los gastos corrientes, sin que pudiera iniciarse una modificación de la estructura económica boliviana en línea con el proyecto de modernización planteado por el nacionalismo²⁹.

De cualquier forma, si las tensiones de la coyuntura son innegables, añadamos a ello el carácter utópico del programa reformista: éste pretendía emular los niveles de desarrollo de los países más avanzados sin tener en cuenta hasta qué punto tal estrategia había de quedar bloqueada por la larga trayectoria de una economía monoexportadora. La posición que ocupaba Bolivia en el mercado mundial no podía alterarse mediante un simple acto de voluntad política, y su tejido productivo era el resultado de una vinculación prolongada a una línea de interdependencia. La emancipación económica del país, fácilmente divulgable como resultado de una subordinación de la oligarquía a la voluntad de la nación, era bastante más compleja en su aplicación, y las condiciones del mercado exterior pusieron aún más de manifiesto el difícil arranque de un proceso de modernización y diversificación económica. Ciertamente, el discurso nacionalista pagaba el simplismo con que había abordado los problemas de desarrollo, pero hubo de añadir a ello los obstáculos que se derivaban de su propia apuesta política. Su obsesión por crear una burguesía *nacional* como responsable del crecimiento económico le hizo actuar con extremada timidez a la hora de enfrentarse con los propietarios de las minas

29. La deuda externa, a fines de 1936, rebasaba los 1.822.000.000 bolivianos, distribuidos en más de 85 millones de dólares y casi un millón de libras esterlinas. La atención de la deuda interna, la única que seguía amortizándose, absorbía el 34% de los gastos calculados para 1937, mientras otra tercera parte se dedicaba a los gastos militares. La asignación otorgada a los ministerios que debían cubrir los objetivos de la plataforma reformista no pasaba de 1/5 del presupuesto. Durante el gobierno de Toro, los ingresos procedentes de la imposición directa no llegaban al 11%, mientras que casi la mitad se consideraba como «ingresos varios», en su mayoría procedentes de la diversidad de cambios de divisas. He hecho un esfuerzo para fijar las condiciones de la coyuntura económica de posguerra en mi tesis doctoral, pp. 243-299 y 686-752.

y de las haciendas. El discurso de la izquierda socialista, resumido en la consigna de *tierras al indio, minas al Estado*, aun cuando fuera utilizado en alguna ocasión por la prensa nacionalista, no fue llevado a la práctica hasta la revolución de 1952. Las medidas de modernización no podían llevarse adelante mientras la propiedad de las dos principales fuentes de riqueza boliviana continuaran en manos de quienes habían diseñado el modelo de crecimiento anterior. La renuncia a la reforma agraria y a la nacionalización de las minas, procedente de sus esfuerzos por edificar un capitalismo nacional, no sólo restó un indispensable apoyo de masas al proyecto, sino que incrementó las posibilidades de resistencia de los sectores obligárguicos e imposibilitó la modernización proyectada.

El regionalismo oriental se presentó, ante el programa nacionalista, como un problema que conjugaba las dificultades de diversificación económica, el relevo de clases dominantes y la concepción del Estado. Resulta un tema citado con escasa frecuencia, pero que pone de manifiesto desplazamientos importantes en el seno de los grupos dirigentes y traza líneas de división política que no coinciden exactamente con las de clases, para destacar las fidelidades territoriales. Los nacionalistas entendieron siempre su opción de Estado en términos centralistas, aspecto que no les distinguía de las corrientes liberal-republicanas y que, desde luego, les conectaba con los sectores de hacendados y mineros de la zona andina. Siendo ésta la base material de la república, productora de sus principales exportaciones y zona de mayor concentración de población, las relaciones de poder se habían articulado en torno a La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Sucre, cuyas oligarquías se distribuían la influencia en las decisiones políticas. La desconexión física con las zonas nororientales plasmaba la imagen de un crecimiento orientado hacia el exterior y de un Estado que ignoraba la mayor parte de su propia territorialidad. La crisis de la minería estañífera coincidió con el crecimiento de la actividad petrolera en Santa Cruz. El inmenso departamento oriental planteaba así, para el reformismo, la urgencia de una definición nacional del Estado y las posibilidades de la diversificación productiva. Sin embargo, la población cruceña tomó conciencia del poder económico de su región en términos muy distintos, considerando la tradicional marginación política que había sufrido el territorio, ejemplificada en una ausencia de comunicaciones atribuible a la desidia de los gobernantes paceños. El orientalismo llegó a convertirse en una fuerza política dominante a fines de los años 30, y hubo de ser ilegalizado por el presidente Germán Busch en 1939, cuando se expresó en un Partido Oriental de clara vocación autonomista³⁰. Nacionalismo frente a regionalismo o, más bien, *bolivianismo* frente a *orientalismo*. En cualquier caso, una opción política frustrada, que se ganó la hostilidad de todos los sectores del altiplano: liberales, republicanos, socialistas,

30. La minoría oriental en la Convención fue muy activa, planteando un proyecto de descentralización desestimado por los representantes del altiplano (*Reactor...*, vol. III, pp. 494 y ss.). Al clausurarse la Asamblea, representantes de Beni, Pando y Santa Cruz formaron un Partido Regionalista cuya jefatura ofrecieron al oriental Busch, sin más resultado que la irritación general de la prensa paceña y cochabambina. Véanse, por ejemplo, las ediciones de *La Razón*, *La Calle* y *El País* (este último, de Cochabamba) correspondientes al mes de febrero de 1939.

nacionalistas... o, para decirlo en términos más claros, de la Bolivia tradicional, fueran las viejas capas mineras dirigentes o la clase media agrupada en torno a un recambio político que excluía la pérdida de hegemonía paceño-cochabambina. Resultaría interesante meditar sobre esa puesta en duda de la nacionalidad boliviana, que no procede de los sectores indígenas, antagonistas habituales del concepto, sino de un sector en general acomodado; que expresa el cambio de base material del desarrollo del país. En todo caso, el nacionalismo expresaba aquí, de manera más sutil, las contradicciones internas de su proyecto que al estimular la diversificación productiva, había de acallar al mismo tiempo las manifestaciones políticas particulares.

Las diversas contradicciones o, para seguir el título del artículo, *paradojas* que hemos señalado en el nacionalismo de los años 30 no evitaron que su discurso fuera incrementando su peso en la sociedad boliviana, a expensas de los grupos tradicionales, pero también a costa de las opciones de izquierda socialista. Tal persistencia obedeció, en buena medida, a la habilidad táctica de sus dirigentes, que siempre fueron capaces de rectificar errores de estrategia, adaptándose a aquellas circunstancias que les dieran mayores posibilidades de capturar el poder estatal. Obedeció también a unas condiciones internacionales que, en el momento de formación de los partidos nacionales de masa, favorecieron que el *movimientismo* adquiriera prestigio como defensor más consecuente de los intereses de la nación y de las clases populares al mismo tiempo, como sucedió durante la II Guerra Mundial, cuando el M.N.R. defendió la riqueza de las materias primas con una rotundidad que difícilmente podían asumir los partidos vinculados a las potencias aliadas, incluyendo a la Unión Soviética. Obedeció, sin duda, a la torpeza de una izquierda socialista incapaz de asimilar, en momentos clave, las diferencias entre nacionalismo popular y fascismo, desprestigiándose en alianzas con los grupos conservadores y cediendo el espacio de la lucha emancipatoria al nacionalismo. Obedeció a la sorprendente capacidad del discurso nacionalista para asimilar una pluralidad de opciones internas, para lograr que corrientes ideológicas dispares, incluso antagónicas en otros paisajes políticos, quisieran hacer su propia lectura favorable de la revolución nacional; lecturas parciales y conscientemente fraccionalistas, pero legitimadoras, al fin y al cabo, de la función integradora del nacionalismo.

En cualquier caso, esa trayectoria hegemónica procede de una frustración. He tratado de destacar aquí los que considero factores básicos del fracaso nacionalista en su primera experiencia de gobierno, pues creo que fue la reflexión colectiva sobre las causas de aquella frustración lo que permitió su continuidad en el escenario político boliviano y su conversión en fuerza social hegemónica. Es de esperar que el análisis de su primera experiencia fallida nos ponga en mejores condiciones para entender algo más que el dominio estricto de la crisis del Chaco. Que nos acerque a su éxito posterior, culminado en la que, junto a la cubana, la nicaragüense y la mexicana, es la revolución de mayor envergadura y riqueza política en el siglo XX americano.